

Informe de los Acuerdos Regionales del Pueblo Aymara Región Metropolitana

En el marco de la Consulta para el Reglamento de la Ley 21.600

1. Aspectos relacionados a la ejecución de la consulta

1.1. Difusión

La difusión del proceso de Consulta Indígena fue insuficiente para garantizar la participación efectiva de los miembros de los pueblos indígenas que habitan en la Región Metropolitana.

Tanto la CONADI como las municipalidades sede realizaron una promoción limitada o nula del proceso, y el Ministerio del Medio Ambiente publicó las fechas de las reuniones principales con posterioridad a su realización.

Esta situación no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Supremo N° 66/2013, que establece expresamente que:

- a) *“La convocatoria será publicada en las páginas web del órgano responsable y de la Corporación”.*
- b) *“Además, se realizará la convocatoria mediante cualquier otro medio adecuado que permita facilitar el oportuno conocimiento de la convocatoria, tales como: avisos en radios, oficios a las municipalidades respectivas y a otras entidades públicas que puedan facilitar su difusión o cualquier otro medio idóneo”.*

A fin de fortalecer la transparencia y equidad del proceso, se solicita como medida correctiva que el Ministerio ponga a disposición de los representantes indígenas los canales oficiales de comunicación institucional (redes sociales, página web y listas de correo) para la difusión de las próximas etapas de la consulta, solicitud que fue acogida en la reunión de diálogo regional con la SEREMI de Medioambiente.

Asimismo, proponemos que, tratándose de consultas relativas a proyectos de ley, reglamentos u otras normas de alcance nacional, las convocatorias sean comunicadas también mediante correo electrónico a todas las personas indígenas registradas en la CONADI, y no exclusivamente a las comunidades o asociaciones constituidas, en coherencia con el principio de autodeterminación consagrado en el Convenio 169 de la OIT.

Las deficiencias en la difusión descritas han tenido un impacto directo en la participación representativa de los pueblos, como se detalla a continuación.

1.2. Participación

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2024, aproximadamente un 26% de la población indígena del país reside en la Región Metropolitana, lo que la convierte en la región con mayor número de personas pertenecientes a pueblos originarios.

Al 17 de septiembre de 2025, la CONADI había acreditado a 1.637.806 personas indígenas en Chile, por lo que se puede estimar que cerca de 424.411 indígenas habitan en esta región.

Durante las etapas de planificación e información del proceso de consulta, participaron aproximadamente 116 personas (equivalentes al 0,03% del total de la población indígena regional), correspondientes a los pueblos mapuche, quechua, aymara, diaguita y rapa nui.

En la etapa de deliberación, se registró la participación efectiva de 63 personas (cerca del 0,015%), la mayoría de las cuales habían participado previamente en las etapas anteriores, y pertenecían exclusivamente a los pueblos mapuche, aymara y quechua.

Estos antecedentes reflejan una baja representatividad respecto del universo de personas y pueblos con presencia en la Región Metropolitana, lo que resulta incongruente con los principios de amplitud, representatividad y adecuación cultural establecidos en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y en los artículos 10 y 17 del Decreto Supremo N° 66/2013.

Asimismo, se advierte una discrepancia significativa entre las cifras reales y aquellas reportadas por el Ministerio del Medio Ambiente, que informan la participación de 535 personas y cinco pueblos representados.

A fin de resguardar la transparencia del proceso y la validez de sus resultados, los representantes aymaras de la Región Metropolitana evaluarán la posibilidad de solicitar a la Contraloría General de la República y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que verifiquen el grado de cumplimiento de las normas de participación y representatividad establecidas en la legislación vigente.

Dicha solicitud se formula en el marco de la buena fe y con el propósito de fortalecer la legitimidad y confianza en el proceso de consulta.

2. Representantes Regionales de la Región Metropolitana:

Los datos de identificación y contacto que se incluyen a continuación tienen carácter exclusivamente administrativo y se remiten para efectos de validación y comunicación oficial con el Ministerio del Medio Ambiente, en el marco del proceso de Consulta Indígena sobre la Ley N° 21.600.

En reunión virtual citada para el efecto, fueron escogidos para representar a la Región Metropolitana en el diálogo nacional, las siguientes personas:

2.1. Representantes titulares:

- | | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| ➤ María Valencia | 8.059.787-8 | mariavalen@gmail.com | +56 9 6346 1963 |
| ➤ Michael Correa | 16.772.732-8 | correa.michaelantoine@yahoo.es | +56 9 3718 8589 |
| ➤ Alvaro Plaza | 17.603.374-6 | alvaro.plaza@usach.cl | +56 9 6216 5612 |

2.2. Representantes suplentes (en orden de prelación):

- | | | | |
|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 1ª.- Gladys Roa | 7.461.479-5 | gladys.1953.roa@gmail.com | +56 9 8196 3870 |
| 2ª.- Jannet Patzi | 23.066.296-7 | phaxinarupa03@gmail.com | +56 9 4939 5145 |

3. Propuestas de artículos para el reglamento

Las siguientes propuestas se formulan con carácter referencial y tienen por objeto aportar insumos sustantivos al proceso de reglamentación, sin perjuicio de los ajustes técnicos que el Ministerio estime necesarios para su adecuada articulación con el resto del cuerpo normativo:

Artículo 1°.- Definiciones.

Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:

- a) Convenio Vinculante con Pueblos Indígenas: instrumento formal de acuerdo entre el SBAP y los pueblos indígenas directamente afectados, celebrado en los términos del artículo 68 de la Ley N° 21.600. Este mecanismo se entenderá como la expresión del derecho a la consulta y participación efectiva reconocido en el Convenio N° 169 de la OIT, asegurando su carácter vinculante y el respeto a la libre determinación de los pueblos.
- b) Pueblos de los Bosques: pueblos Indígenas que tradicionalmente han habitado bosques y praderas, tales como los mapuche, williche y selk'nam.
- c) Pueblos de las Montañas: pueblos Indígenas de valles cordilleranos, montañas o ambientes altiplánicos, como aymara, quechua, diaguita, atacameño y colla.
- d) Pueblos de las Aguas: pueblos Indígenas que habitan islas, litorales, ríos y canales, entre ellos lafkenche, rapa nui, chango, kawésqar y yagán.

Con esto, se busca formalizar una tipología de pueblos que sea coherente con su relación ancestral con los ecosistemas, en línea con los arts. 23 y 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Artículo 2°.- Comité Científico Asesor Nacional.

El Comité Científico Asesor Nacional será creado por el Director Nacional del SBAP y estará compuesto por diez miembros: el Director Nacional, quien lo presidirá, y nueve integrantes designados por él, representantes de instituciones académicas o científicas dedicadas al conocimiento o conservación de la biodiversidad.

Este primer párrafo no es cuestión de fondo, sólo se realiza una interpretación menor del artículo 9° de la Ley 21.600 para corregir la inconsistencia paritaria, ya que un equipo impar no puede ser paritario.

Al menos tres de sus miembros deberán desempeñarse en la Región de Atacama o más al norte, y otros tres, en la Región de La Araucanía o más al sur, garantizando equilibrio territorial.

Para nosotros, como pueblos indígenas, es de vital importancia que todos los ecosistemas sean

protegidos. La Ley 21.600 exige que 6 miembros se desempeñen en regiones distintas a la Metropolitana; esto es descentralización política, pero de poco sirve a nivel biológico. Esta distribución propuesta asegura que todas las macrozonas bioclimáticas estén representadas y se cumpla con el criterio de considerar las zonas extremas.

Además, al menos la mitad de sus miembros deberán contar con acreditación indígena.

De esta forma, se asegura participación indígena sustantiva.

Esta propuesta busca complementar la diversidad territorial con la cultural, y asegurar que los expertos que participen posean algún vínculo socio-espiritual con el territorio.

Artículo 3°.- Funciones del Comité Científico Asesor.

- a) Proponer criterios científicos y socioculturales para la declaración y gestión de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios.
- b) Emitir informes técnicos vinculantes sobre concesiones y autorizaciones que involucren biodiversidad crítica o patrimonio biocultural.
- c) Asesorar al SBAP en materia de monitoreo, educación ambiental y conservación comunitaria.

Se declara carácter vinculante de sus informes en materias críticas, reforzando la independencia técnica del órgano.

Artículo 4°.- Comités de Gestión Regional.

Existirá un Comité de Gestión en cada región, presidido por el Director Regional del SBAP.

El Comité estará integrado por:

- a) Un representante de cada municipio con territorio dentro de Áreas Protegidas, en cualquiera de sus categorías;
 - a) Un representante de las juntas de vecinos colindantes a Áreas Protegidas, en cualquiera de sus categorías;
 - b) Propietarios de áreas privadas de conservación o sus delegados;
 - c) Tres representantes del sector académico o de ONGs designados por el Comité Científico Asesor;
 - d) Tres representantes de los Pueblos de los Bosques (en las regiones de Atacama al sur);
 - e) Tres representantes de los Pueblos de las Montañas (en las regiones del Maule al norte);
- y

- f) Tres representantes de los Pueblos de las Aguas (en todas las regiones salvo la Metropolitana).

Se incorpora composición intercultural territorializada, asegurando representación efectiva de los pueblos en el nivel regional, con pertinencia territorial.

El Estado deberá garantizar la adecuada capacitación ambiental de los integrantes que no tengan formación especial en el área.

Artículo 5°.- Funciones de los Comités de Gestión.

- a) Elaborar el Plan de Gestión Regional, integrando iniciativas públicas y privadas de conservación;
- b) Elaborar, a nombre del SBAP, los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, zonas bioculturales estratégicas y zonas de amortiguación, y aprobar los Planes de Manejo de las áreas protegidas privadas.
- c) Supervisar la ejecución de los Planes de Gestión Regionales;
- d) Servir como órgano consultivo del SBAP para la revisión de políticas regionales de conservación;
- e) Constituir subcomités para el monitoreo participativo de sitios específicos, con acuerdo de las comunidades locales.

Se incorpora competencia directa sobre planes regionales, alineado con el principio de descentralización de la Ley 21.600. También se incorpora el monitoreo participativo con las comunidades locales.

Artículo 6°.- Comité Técnico Nacional.

El Comité Técnico Nacional estará integrado por:

- a) El Director Nacional del SBAP, quien lo presidirá;
- b) Representantes de los Ministerios de Medio Ambiente; Educación; Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Culturas, las Artes y el Patrimonio; Desarrollo Social y Familia; y Bienes Nacionales;
- c) Un representante de la Subsecretaría de Turismo;

Además, integrarán el Comité de forma transitoria, para cada caso particular, y con los mismos derechos y obligaciones:

- d) Un representante del Consejo Regional del territorio correspondiente, elegido por el mismo organismo;
- e) Un representante de la municipalidad en la que se encuentre la concesión;
- f) Dos representantes de los pueblos de los bosques (en las regiones de Atacama al sur);
- g) Dos representantes de los pueblos de las montañas (en las regiones del Maule al norte);
y
- h) Dos representantes de los pueblos de las aguas (en todas las regiones salvo Metropolitana).

Se agrega participación indígena con igualdad de derechos en el Comité Técnico, cumpliendo así con el art. 6.1 del Convenio 169.

Artículo 7°.- Progresividad en la protección.

Con todo, la reducción o desafectación de un Área Protegida estará sujeta al principio de no regresión ambiental, y deberá ser acompañada de la creación o ampliación de otra Área Protegida, asegurando que la nueva superficie afectada sea de **igual extensión y valor ecológico superior, o bien mayor extensión y valor ecológico equivalente**.

Se integra explícitamente el principio de progresividad ambiental y no regresión, reforzando el cumplimiento del art. 7.4 del Convenio 169.

Artículo 8°.- Administración.

Las Áreas Protegidas serán preferentemente administradas en régimen de **coadministración**, mediante convenio vinculante celebrado entre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y las comunidades indígenas locales que mantengan presencia ancestral o actual en el territorio. A falta de comunidades indígenas locales, podrán celebrar dichos convenios las asociaciones indígenas que acrediten vínculo territorial o cultural con el área respectiva.

En caso de no existir presencia indígena actual, la administración podrá efectuarse mediante convenios de coadministración con comunidades locales, universidades, municipalidades u organizaciones de la sociedad civil, en ese orden de prelación.

Sólo en ausencia de las entidades mencionadas, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas asumirá directamente la administración del área.

Se establece una jerarquía de administración que prioriza la coadministración indígena conforme al art. 15 del Convenio 169 y al art. 26 de la Ley 19.253.

Artículo 9°.- Personal y pertinencia cultural.

El SBAP garantizará la presencia de personal capacitado en biodiversidad, gestión comunitaria y pertinencia cultural, y promoverá la incorporación de guardaparques pertenecientes a pueblos Indígenas en las Áreas Protegidas donde éstos mantengan presencia ancestral.

Se da cumplimiento al art. 20 del Convenio 169 sobre igualdad de oportunidades en empleo y formación.

Artículo 10°.- Monitoreo participativo.

El SBAP deberá establecer mecanismos de monitoreo de Sitios Prioritarios que incluyan la participación de comunidades y pueblos Indígenas, integrando indicadores ecológicos y culturales.

Se incorpora conocimiento tradicional indígena conforme al art. 8.j del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Artículo 11°.- Multas y sanciones.

Los fondos provenientes de multas y sanciones derivadas del incumplimiento de los planes de manejo, de los límites de las concesiones y de la realización de actividades no autorizadas en las Áreas Protegidas, se podrán utilizar únicamente en proyectos de restauración ecológica o en la adquisición de tierras para ampliar las Áreas Protegidas, conforme al principio de progresividad ambiental. Todo esto, sin desmedro de las sanciones no pecuniarias que puedan ir aparejadas.

Se propone una forma de financiación que permita sostener económicamente el principio de progresividad ambiental en el tiempo.

Artículo 12°.- Consejos representativos.

Cada grupo de pueblos, de los Bosques, de las Montañas y de las Aguas, constituirá un consejo representativo según sus propias prácticas y tradiciones, previa consulta indígena convocada para definir el protocolo de constitución y elegir sus primeros miembros.

Se aplica la consulta, sólo para fines de representatividad, para que en adelante cada grupo de pueblos pueda deliberar con protocolos propios, respetando el autogobierno de los arts. 7 y 8 del Convenio 169.

Artículo 13°.- Funciones de los Consejos.

Los Consejos Indígenas para las Áreas Protegidas ejercerán las siguientes funciones:

- a) Realizar seguimiento, asesoría y mediación cultural en los procesos de gestión, fiscalización y educación ambiental dentro de sus territorios.
- b) Representar a los Pueblos Indígenas en todos los proyectos de ley, proyectos de reforma legislativa y reglamentos que involucren a la conservación del medioambiente.
- c) Elegir a los representantes que participarán en nombre de los pueblos en los comités asesores.

Sus observaciones serán vinculantes en las materias de pertinencia cultural y uso tradicional.

Se reconoce poder vinculante limitado, equivalente al derecho a decidir sobre asuntos culturales conforme al art. 7 de la Ley 19.253.

También se les reconoce como órgano tradicional consuetudinario para las consultas relacionadas con medioambiente. Esto facilitará procesos de consulta indígena posteriores.

Artículo 14°.- Informe histórico cartográfico.

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en colaboración con el Ministerio de Bienes Nacionales y otros organismos competentes, elaborará un Informe Histórico Cartográfico que identifique las áreas de significación espiritual definidos por los pueblos Indígenas.

Dicho informe se integrará al Registro Nacional de Áreas Protegidas Indígenas y servirá como instrumento técnico para la planificación territorial y la evaluación ambiental, así como para la definición de sitios prioritarios indígenas, áreas protegidas indígenas y sitios inviolables o sagrados. En principio, todas las actividades en las áreas definidas en dicho informe serán objeto de consulta indígena.

Formaliza la obligación estatal de registrar la territorialidad indígena ancestral y sagrada, facilitando la protección legal de sitios sin necesidad de expropiación previa.

Artículo 15°.- Identificación territorial.

El SBAP, en coordinación con los Consejos Indígenas respectivos, elaborará un listado de sitios prioritarios culturales por provincia, para cada grupo de pueblos:

- a) Pueblos de los bosques: todas las provincias desde Copiapó hacia el sur.
- b) Pueblos de las montañas: todas las provincias desde Talca hacia el norte.
- c) Pueblos de las aguas: islas y provincias con litoral marítimo.

Esta distribución busca reconocer las tipologías bioculturales y hábitats ancestrales.

Artículo 16°.- Establecimiento de Áreas Protegidas Indígenas por provincia.

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en conjunto con los Consejos representativos de los pueblos de los Bosques, Montañas y Aguas, tendrá como meta establecer progresivamente al menos un Área Protegida Indígena en cada provincia del país, seleccionada de entre los sitios priorizados por su valor cultural, espiritual o histórico.

La selección deberá fundarse en la significatividad del sitio para la mayor cantidad posible de pueblos con injerencia territorial o cultural en la provincia, privilegiando los lugares donde confluyan elementos naturales y manifestaciones tradicionales de más de un pueblo originario.

Se aplica el principio de representatividad intercultural y de convergencia territorial, conforme a los arts. 26 y 27 de la Ley 19.253 y art. 13 del Convenio 169.

Artículo 17°.- Criterios para la declaración de Áreas Protegidas Indígenas.

La declaración de un Área Protegida Indígena deberá basarse en criterios técnicos, ecológicos y culturales, entre los cuales se considerarán:

- a) El vínculo espiritual o ritual del sitio con uno o más pueblos Indígenas;
- b) La presencia de conocimientos o prácticas tradicionales asociados a la conservación;
- c) La coexistencia de especies, ecosistemas o elementos sagrados para dichos pueblos;
- d) La posibilidad de gestión conjunta o comunitaria del territorio.

El procedimiento de declaración deberá concluir con un convenio vinculante entre el SBAP y los pueblos participantes, que establezca derechos, deberes, y mecanismos de manejo y fiscalización.

Desarrolla la obligación del art. 27 de la Ley 19.253, que faculta a los pueblos a conservar y administrar sus recursos naturales, y compatibiliza dicha Ley con la 21.600.

Artículo 18°.- Administración de las Áreas Protegidas Indígenas.

Las Áreas Protegidas Indígenas serán administradas mediante coadministración entre el SBAP y los Consejos Indígenas correspondientes, pudiendo participar también las municipalidades o comunidades locales del territorio.

La administración deberá respetar las normas consuetudinarias y los sistemas propios de toma de decisiones de los pueblos involucrados, y podrá incorporar guardaparques o monitores pertenecientes a dichas comunidades.

Se operacionaliza el derecho de gestión propia reconocido en el art. 35 de la Ley 19.253 y el art. 15.1 del Convenio 169.

Artículo 19°.- Sitios Inviolables o Sagrados.

Se considerarán Sitios Inviolables aquellos lugares reconocidos por los pueblos Indígenas como sagrados, de significación espiritual o ancestral, cuya integridad material o simbólica no puede ser objeto de concesión, explotación ni intervención alguna.

La localización, delimitación y protección de estos sitios será determinada por los Consejos Indígenas de los Pueblos, en conjunto con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), mediante convenio vinculante y con resguardo de confidencialidad.

Cualquier acto administrativo que afecte directa o indirectamente a un sitio declarado inviolable será nulo de pleno derecho.

Crea una categoría de protección absoluta, equivalente a “patrimonio espiritual intocable”, coherente con el art. 12 del Convenio 169 y la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Artículo 20°.- Protección y usos permitidos.

Los usos en Áreas Protegidas Indígenas estarán orientados a la preservación del patrimonio biocultural y espiritual.

Se considerarán compatibles las actividades ceremoniales, de enseñanza tradicional, turismo cultural controlado, recolección sustentable y otras prácticas reconocidas por los pueblos coadministradores.

Toda actividad externa o concesión dentro de estas áreas requerirá consentimiento libre, previo e informado de los pueblos administradores, conforme al artículo 68° de la Ley N° 21.600.

Asegura consentimiento vinculante, fortaleciendo soberanía cultural y ambiental sobre los territorios, y previniendo conflictos posteriores.

Artículo 21°.- Registro Nacional de Áreas Protegidas Indígenas.

El SBAP llevará un registro público y actualizado de las Áreas Protegidas Indígenas, con información cartográfica, cultural y administrativa, elaborada en coordinación con los Consejos representativos.

Los elementos culturales o espirituales que las comunidades declaren como reservados serán registrados bajo cláusulas de confidencialidad, con protección de acceso restringido.

Cumple con la obligación de protección de los arts. 17 y 18 del Convenio 169 y del art. 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Artículo 22°.- Acceso preferente a la justicia ambiental.

Los pueblos Indígenas, sus comunidades y organizaciones representativas tendrán acceso preferente y gratuito a los mecanismos de reclamación, revisión y justicia ambiental vinculados a la aplicación de este reglamento, sin perjuicio de los derechos que les reconoce la Ley N° 21.600.

En la resolución de controversias o reclamaciones que afecten directamente a pueblos Indígenas, los tribunales ambientales y demás órganos competentes deberán considerar sus sistemas jurídicos consuetudinarios y sus normas propias de resolución de conflictos.

Se reconoce el pluralismo jurídico ambiental y se da acceso preferente, en coherencia con los arts. 8 y 9 del Convenio 169 y los arts. 25 y 27 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Artículo 23°.- Actividades ancestrales.

Todas las actividades culturales, ceremoniales o de subsistencia ancestral de los pueblos Indígenas se considerarán usos legítimos dentro de las Áreas Protegidas, debiendo el Plan de Manejo limitarse a determinar cuáles podrán realizarse libremente y cuáles requerirán condiciones de seguridad o coordinación específica.

En este punto, queremos impedir que se criminalicen o prohíban las prácticas y usos ancestrales. De esta forma, se da cumplimiento a los arts. 11, 12 y 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre prácticas culturales y medios de vida tradicionales.

Artículo 24°.- Exenciones.

Las personas pertenecientes a pueblos Indígenas estarán exentas del pago de tarifas de ingreso o uso dentro de las Áreas Protegidas.

Se reconoce derecho de acceso cultural sin discriminación económica, en línea con el art. 27° de la Ley 19.253. Con ello se corrige la ambigüedad lingüística utilizada en el artículo 70° de la Ley 21.600.

Artículo 25°.- Autorizaciones.

Toda actividad dentro de un Área Protegida que no esté expresamente permitida en su Plan de Manejo requerirá autorización del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Dicha autorización deberá evaluarse considerando el impacto ambiental, cultural y social de la actividad, y **requerirá convenio vinculante con los pueblos Indígenas afectados**, cuando el Comité de Gestión regional lo determine.

Esta propuesta se articula con la anterior, que señala que en el Comité de Gestión regional habrá participación del SBAP, de las Áreas Privadas, de los municipios y de los pueblos indígenas, siendo estos últimos los idóneos para señalar al Comité si sufrirán afectación y de qué tipo. Se aplicará el convenio vinculante del art. 68 de la Ley 21.600, garantizando el consentimiento previo, libre e informado.

Artículo 26°.- Condiciones de las concesiones.

Las concesiones deberán respetar los derechos de uso tradicional, tránsito, recolección y práctica cultural de los pueblos Indígenas y comunidades locales, los cuales tendrán prelación sobre las actividades económicas.

De esta forma, se evita subordinación de derechos ancestrales a derechos concesionales, conforme al art. 13 del Convenio 169.

Toda concesión deberá contener cláusulas que aseguren el reparto equitativo de beneficios, mecanismos de restitución en caso de daño ambiental y cláusulas de nulidad en caso de incumplimiento del convenio vinculante indígena.

Artículo 27°.- Acceso a recursos genéticos.

El uso de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados requerirá consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas, además de los permisos establecidos por la legislación nacional e internacional.

La prospección de recursos genéticos estará sujeta al mismo procedimiento de consentimiento previo y convenio de concesión que su uso efectivo en investigación o producción.

Se refuerza el principio de consentimiento, conforme al art. 15 del Convenio 169 y el art. 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. También se previene la prospección genética no autorizada, como primera medida para evitar la biopiratería.

Artículo 28°.- Patentes y derechos de propiedad intelectual.

Todo convenio, permiso o concesión que implique el acceso, uso, aprovechamiento, investigación o manejo de recursos genéticos nativos, sus derivados o los conocimientos tradicionales asociados, deberá incorporar cláusulas expresas que aseguren el respeto a los derechos colectivos de los pueblos Indígenas, la prevención de la biopiratería y la no imposición de cargas económicas derivadas de patentes o registros sobre dichos recursos. Las siguientes disposiciones serán de aplicación obligatoria y de orden público:

Se establece la obligatoriedad de incorporar estas salvaguardas en toda concesión o convenio que involucre recursos genéticos nativos o conocimientos tradicionales.

- a) Ninguna patente, certificado vegetal, derecho de obtentor, ni otro título de propiedad industrial o intelectual podrá imponer cargas económicas, restricciones de uso o limitaciones al libre ejercicio de prácticas agropecuarias, culturales o medicinales tradicionales por parte de los pueblos Indígenas, respecto de especies nativas o variedades derivadas de éstas.

Evita cobros o limitaciones por uso tradicional de variedades locales, como se ha visto en casos internacionales.

- b) No podrá exigirse autorización ni pago alguno a personas naturales o comunidades indígenas por la utilización, conservación, intercambio o mejora de recursos genéticos nativos o conocimientos tradicionales asociados, aun cuando existan registros o patentes privadas sobre variedades relacionadas.

Refuerza el derecho al uso libre y perpetuo de conocimientos tradicionales, incluso frente a registros posteriores.

- c) En ningún caso podrá reconocerse propiedad intelectual o industrial sobre material genético nativo que haya sido extraído, modificado o reproducido fuera del país y posteriormente reintroducido en el territorio nacional, cuando ello implique restringir el acceso, la conservación o el uso tradicional del recurso original.

Evita la apropiación o “reimportación patentada” de material nativo.

- d) Los convenios o contratos que involucren recursos genéticos o conocimientos tradicionales deberán reconocer expresamente la propiedad colectiva e inalienable de los pueblos Indígenas sobre tales recursos y saberes, prevaleciendo éstos sobre cualquier derecho individual o corporativo.

Consolida la primacía de los derechos colectivos indígenas, en línea con el art. 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

- e) Toda concesión o convenio deberá establecer cláusulas de responsabilidad por contaminación genética, obligando al titular del registro, patente o concesión a responder por los daños ambientales, culturales o económicos derivados de la dispersión de material genético modificado hacia territorios indígenas o ecosistemas nativos.

Previene litigios y protege la integridad de las variedades tradicionales, también previniendo casos que han ocurrido en otras partes del planeta.

Las disposiciones del presente artículo tendrán carácter de orden público y deberán ser incorporadas, sin excepción, en los actos administrativos, contratos y resoluciones emanadas del SBAP u otros organismos del Estado que autoricen actividades sobre especies o recursos genéticos nativos.

De esta forma, se asegura su aplicación transversal y vinculante en todas las decisiones del Estado. Se introduce protección contra biopiratería, coherente con el Protocolo de Nagoya y el art. 8.j del Convenio de Diversidad Biológica.

Artículo 29°.- Monitoreo de biodiversidad.

El SBAP establecerá un sistema nacional de monitoreo ecológico, social y cultural de las Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios, con participación de comunidades locales y pueblos Indígenas. El monitoreo deberá incluir indicadores biológicos y culturales, y podrá incorporar metodologías propias de los pueblos indígenas.

Se incorpora conocimiento tradicional, conforme al art. 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto permite el sinergismo, ayudando a los pueblos indígenas expandir y cultivar sus conocimientos y metodologías ancestrales, y al SBAP, fortalecer los muestreos y registros con el conocimiento tradicional.

Artículo 30°.- Fiscalización.

El SBAP fiscalizará el cumplimiento de las normas y planes de manejo.

La fiscalización deberá realizarse en coordinación con los Comités de Gestión Regional y los Consejos Indígenas de cada grupo de pueblos, garantizando la participación observadora y consultiva de estos últimos.

Se agrega control comunitario como medida de transparencia y cogestión.